

## Robo de cables eléctricos

El robo de cables eléctricos se ha convertido en una grave amenaza, especialmente para las comunidades rurales de la provincia de Biobío. No se trata de un hecho aislado porque este delito impacta de manera recurrente a familias, a las postas de salud, escuelas y sistemas de agua potable, dejando sin acceso a servicios básicos a miles de personas. La situación se viene arrastrando hace demasiado tiempo, es insostenible y requiere una respuesta contundente por parte de las autoridades.

El problema es de carácter nacional, pero golpea con especial crudeza a las zonas apartadas, donde la reposición del suministro es más lenta y las opciones de respaldo, más limitadas. De acuerdo con datos de Empresas Eléctricas AG., en 2024 hubo cerca de 1.200 robos de cable en todo Chile, afectando a más de 541 mil clientes. Se estima que, en total, se sustrajeron 590 kilómetros de conductores eléctricos, una cifra alarmante que mantiene la tendencia observada en años anteriores.

En las comunas rurales de la provincia de Biobío, el impacto de estos robos – orquestado por verdaderas bandas delictuales – no solo se traduce en prolongados cortes del servicio de energía, sino también en daños a la economía local. La agricultura, que depende del riego tecnificado y la actividad ganadera se ven gravemente afectadas. La gran mayoría de las familias se surte de pozos que sacan el agua con motores eléctricos. Pero eso no es todo. También está el peligro para la seguridad de los habitantes, quienes muchas veces deben enfrentarse a cortes repentinos de energía en plena noche o en medio de una jornada laboral. La incertidumbre y el miedo se

han vuelto parte de la rutina en sectores donde estos delitos se repiten con frecuencia.

Los datos de robos confirman que la fiscalización y persecución de estos delitos han sido insuficientes. Durante 2024, las empresas del sector presentaron 546 querellas y denuncias, pero la sensación de impunidad persiste. No basta con reaccionar ante los hechos consumados; es imperativo actuar con antelación. El Congreso discute proyectos de ley que podrían endurecer las penas y mejorar la trazabilidad del cobre robado. Es urgente que estas iniciativas se aprueben con prontitud para enfrentar el problema desde su origen: el comercio ilegal de material sustraído.

El llamado es a la acción coordinada. Carabineros, fiscalías, municipios y empresas deben fortalecer sus esfuerzos para prevenir estos robos. Se requiere una mayor presencia policial en los sectores más afectados, así como estrategias de monitoreo que permitan reaccionar rápidamente ante eventuales sustracciones. Además, es fundamental que la ciudadanía juegue un rol activo denunciando cualquier actividad sospechosa.

El robo de cables golpea la calidad de vida de quienes habitan en zonas rurales. La energía es un servicio esencial y su interrupción recurrente profundiza la desigualdad entre el mundo urbano y el rural. Solo con un trabajo conjunto y decisiones firmes se podrá combatir este flagelo y garantizar el acceso seguro y continuo a la electricidad, un derecho básico que sigue siendo vulnerado con demasiada frecuencia en los sectores rurales del país.